

México: La crisis del poder

Gilly, Adolfo

Adolfo Gilly: Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, colaborador del periódico La Jornada y la revista Nexos. Historiador; autor, entre otras obras, de La revolución interrumpida (1971) y El cardenismo, una utopía mexicana (1994).

Dicen que lo que pasó el 21 de agosto de 1994 en México no es lo que pasó. Quién y cómo habría ganado esa elección de no haber habido fraude, nunca lo sabremos, pues es una mera suposición contrafactual. La magnitud del fraude malogró la prueba, tanto para la elección presidencial como para la que determina la composición del Congreso.

1. En un proceso electoral viciado, Ernesto Zedillo ha sido designado como el próximo presidente de México. El Congreso de la Unión, electo con los mismos vicios de procedimiento, validó por mayoría esa designación. El acceso de Zedillo a la presidencia es la afirmación de la nueva dirección del país gestada en el sexenio de Miguel de la Madrid y consolidada bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari: la de los representantes políticos del capital financiero (nacional y transnacional). Un puñado de grandes fortunas, algunas de ellas formadas en el actual sexenio (Caballero Peniche, por ejemplo), ha subordinado a otros sectores de la clase gobernante y, controlando los destinos de la nación, decide por sí y ante sí lo principal mientras negocia tan sólo lo accesorio. Este poder concentrado y secreto ha logrado ya un reciclamiento y una renovación de la alta burocracia partidaria y estatal, que ha pasado al servicio de este nuevo grupo dominante. El PRI ha cambiado de dueño.

Para alcanzar este resultado e impedir interferencias democráticas en la sucesión de ese poder que se autorreproduce, se instrumentó el fraude preelectoral y electoral de agosto y se activó después el nutrido y variado coro de los legitimadores. Es la moderna versión de la cargada, costumbre tan antigua como vencedores hay en este mundo ¹.

¹Los mecanismos por los cuales se desarrolló la manipulación y el fraude fueron diversos: una enorme inequidad en los recursos electorales, con los dineros del Estado totalmente abiertos al PRI y, sobre todo, el uso sin límites del monopolio de la TV, frente al cual el imperio de Berlusconi es un juego de niños. También, un padrón elaborado por el gobierno, donde se combina una cantidad (aún no determinada) de «rasurados» (votantes que no aparecen en el padrón y no pueden votar) con una cantidad de «fantasmas» (votantes que no existen pero aparecen en el padrón y alguien vota por ellos) y el control oficial Sobre el Instituto Federal Electoral. Por otra parte, una cantidad increíble de miniopeaciones de fraude el día de la elección, desde las presiones para votar con amenazas de represalias económicas u otras - no inscribir los hijos a la escuela, retirar un permiso de venta de

2. La ofensiva democrática desde la sociedad, visible durante la campaña electoral y más intensa después del 1° de enero de 1994, no fue suficiente para derrotar estos mecanismos de reproducción viciada del sistema. Al menos tres razones pueden anotarse: a) la magnitud y sofisticación de las operaciones fraudulentas realizadas desde el Estado, superior a las previsiones mismas de la oposición; b) la decisión inquebrantable del grupo gobernante de no soltar el poder a ningún costo, como lo muestran el tratamiento dado al asesinato de Colosio y los atentados o asesinatos posteriores; c) el crecimiento de una tendencia conservadora hacia la derecha en parte del electorado, que habría dividido el voto opositor en forma diversa al pasado, más los efectos de la contención aparente de la inflación (relativa estabilidad del peso) en comparación con el sexenio precedente; d) algunas políticas de la oposición democrática (PRD y ADN).

3. El fraude tuvo dos momentos y dos niveles. El primero, ampliamente documentado, fue el momento preelectoral. La inequidad total en recursos, medios de comunicación, elaboración y control del padrón y apoyos del Estado está ampliamente documentada. El Estado, no un partido, organizó su propia elección e hizo ganar al PRI. El segundo momento fue la jornada misma del 21 de agosto, el fraude material propiamente dicho. Los primeros estudios mostraron anomalías estadísticas mayores, no explicables por azar o por error sino por la presencia de una manipulación extraña. La hipótesis probablemente más cercana a la realidad de las elecciones, en la cual se combinan análisis e informaciones dispersas, algunas provenientes del ámbito estatal, es que las proporciones electorales reales se dividieron, a grandes rasgos, en tres tercios. Es decir, que los tres partidos (PRI, PRD y PAN), en elecciones limpias habrían obtenido cada uno alrededor del 30%. Pero en México cada elección se piensa como un referéndum y al PRI no le bastaba ganar más o menos limpio con, digamos, una mayoría del 37%, sino que necesitó el 50,01% como mínimo para mantener la lógica, la hegemonía y el modo de dominación del sistema de partido de Estado.

4. Ha sido estudiado y documentado el efecto de las políticas intimidatorias preelectorales para inducir el voto popular. Me parece incorrecto llamarlo voto del miedo; una cosa es ser intimidado y ceder ante la amenaza (la bolsa o la vida, el voto o el despido o la leche o el terreno o la inscripción escolar para tu hijo), otra diferente es tener miedo. Este voto intimidado se articula, en buena parte, sobre un reciclaje del viejo corporativismo. El control de la multitud de semiocupados, vendedores ambulantes, puesteros, de todo el sector del trabajo informal que depende del per-

abarrotados, etc. -, hasta los carruseles - camiones de votantes que van a varias casillas -, los soldados y policías que votan en grupo llevados por sus jefes, el voto no secreto (en más de un tercio de las casillas, sobre todo en zonas rurales) y otros viejos trucos.

miso y la buena voluntad de las autoridades para sobrevivir, es el nuevo y degradado terreno del antiguo corporativismo, más indefenso aún que el trabajador industrial sindicalizado.

Sobre ese terreno se asientan las prácticas viciadas del control del PRI (y, por desgracia, no sólo de PRI sino también de otros gestores políticos). Basta medir la amplitud del sector informal en la economía urbana para tener una idea de la fuerza de este corporativismo renovado. En este sexenio se perfeccionaron sus controles, a medida que más sectores iban siendo expulsados de la economía formal. Esa tendencia, a no dudarlo, continuará.

5. En varias regiones se registró una merma del apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD, con relación a la votación mayoritaria de 1988 (fraude al que ahora, vaya caso, hasta las publicaciones más conservadoras, como *The Economist* de Londres, aluden como real: ¿dirán en el 2000 la verdad sobre 1994?). Esta merma (que dista muchísimo del 17% que se le reconoce) puede deberse a varios factores que habrá que analizar en su mérito: a) una conservadorización en ciertos sectores de la sociedad, acorde con lo que sucede en otros países; b) la aparición del PAN como una aparente opción opositora más visible que en el pasado y el voto de sectores pro-panistas antes abstencionistas y ahora atraídos por la posibilidad de votar; c) los efectos del debate televisivo (y sobre todo de la estrategia estatal de propaganda posterior por todos los canales, pues si el debate en sí fue tan decisivo como dicen, habría sido Zedillo quien, de lejos, debió perder la elección); d) la imprecisión o la excesiva amplitud de arco en ciertos objetivos de la campaña de Cárdenas; e) la imagen negativa del PRD como un conjunto de facciones y personas que se disputan internamente posiciones de poder sin precisar nunca diferencias reales de programas o de ideas (la designación de los candidatos a diputados y senadores fue quizás el ejemplo más negativo de esta imagen) y la debilidad de muchas campañas locales, sustentadas casi únicamente en la imagen del candidato presidencial. Ninguno de estos cinco factores (y otros que se podrían agregar) es suficiente por sí solo para explicar aquellas mermas regionales. En conjunto, pueden dar válidos elementos de análisis.

Es incierto que Cárdenas hubiese debido correrse más a la derecha o al centro, o más a la izquierda, o más quién sabe a dónde, para obtener más votos. Lo que hizo infatigablemente durante los largos meses de campaña fue exponer y precisar su propia política. Un candidato va a una elección para obtener el mayor número posible de votos para sus propuestas y para ganar el apoyo necesario para aplicarlas si es electo. Es lícito discutir cómo presentarlas mejor y en términos más convincentes.

tes para el mayor número. No lo es presentar cualquier política con tal de ganar votos por todos lados, lo cual sólo conduce, en los hechos, a perder votos y credibilidad frente a todos y a hundirse como político.

6. Las fuerzas progresistas, en cálculos previos a las elecciones, subestimaron la magnitud y los alcances del sofisticado mecanismo de fraude montado por el aparato estatal con sus ingentes recursos, como aquellas mermas o desplazamientos de anteriores apoyos electorales. Existen al menos dos razones objetivas para el optimismo progresista previo:

a) La movilización nacional en apoyo a Cárdenas, ciudad por ciudad, región por región, fue uno de los acontecimientos políticos mexicanos más impresionantes de esta segunda mitad del siglo. Recorrí buena parte del país en la campaña. No fueron espejismos las enormes y fervorosas concentraciones en Morelia, Ciudad Hidalgo, Acapulco, Ciudad Madero, Mexicali, Villahermosa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Ciudad Universitaria hasta el inmenso Zócalo del 13 de agosto y la desbordante Xalapa de tres días después. No fueron sueño las carreteras y los pueblos llenos de gente movida por su propia voluntad al paso de la gira del candidato. No fueron invento las cartas, los mensajes, las propuestas. Si bien no hay correlación exacta entre mítines y voto, tampoco es cierto que son magnitudes totalmente indiferentes entre sí. Ningún candidato suscitó estas movilizaciones espontáneas, aunque Fernández, del PAN, las tuvo en algunas ciudades y Zedillo pudo hablar a sus acarreados. En términos sociológicos, a menos que México sea un país fuera del mundo conocido, no existe correlación entre el hecho objetivo de los mítines multitudinarios y el lejano tercer puesto cardenista del 17%, como tampoco la existe entre esta magra cifra y la violencia masiva de la campaña oficial anticardenista. Y como las cifras oficiales de una elección amañada no son la verdad última del universo, alguna explicación basada en datos duros surgirá, tarde o temprano, sobre estas correlaciones ausentes. El país sabrá, como siempre; desde Vasconcelos hasta aquí, hemos terminado por saber.

b) El estado de inquietud cercano a la crisis en los niveles medios y medio altos del aparato estatal en la semana previa a las elecciones (después del Zócalo del 13 de agosto), también es un dato indiscutible, comprobado por las más diversas fuentes y conductos, antes y después de la elección. A pesar de que las encuestas daban con extraña precisión los resultados que sobrevendrían, en esos niveles no les creían. También ellos percibían la realidad social, constataban la debilidad o la tibieza de sus propios apoyos y se disponían para un resultado negativo.

7. Como resultado de este proceso viciado, el régimen se apresta a una renovación de su personal gobernante sin haber podido resolver su crisis de dominación. En los papeles, los resultados son maravillosos. En la realidad, las cifras no se ajustan con los hechos de la vida.

No hay candidato vencedor que haya suscitado tan escaso entusiasmo popular como Zedillo. Ni un mitin, ni un festejo. No hay candidato perdedor que, en medio del pasmo nacional suscitado por las cifras oficiales, haya organizado tal cantidad de movilizaciones y mítines tan concurridos como Cárdenas. El desafío cardenista, bajo formas cambiantes y pese a ausencias o dobleces, sigue presente.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las movilizaciones campesinas e indígenas en Chiapas, por su parte, también siguen presentes, testimonios vivos de una dominación regional en crisis. Allí el régimen ha querido imponerse con todo. Al parecer, querrá restablecer con la fuerza lo que con votos no pudo.

8. El régimen tampoco ha resuelto su crisis de reproducción. No se puede gobernar un país moderno con fraude electoral, del mismo modo como no se puede competir en el mercado mundial con defectuosas normas de calidad. La realidad, bajo la forma del mercado en un caso y de la sociedad en el otro, termina por pasar sus facturas a los tramposos. No se puede reproducir el poder violando sistemáticamente sus propias reglas de reproducción, en este caso las leyes electorales y la Constitución. Ante jueces imparciales, el primero y mejor indicio del fraude, si no sobraran otros, es que días después de «la elección más concurrida y más limpia de la historia», por boca de su Secretario de Gobernación y otros voceros el gobierno propuso, ahora sí, una nueva reforma electoral, la cuarta, para asegurar la limpieza de las elecciones futuras. ¿En qué quedamos por fin, son limpias o no son limpias?

Una elección moderna no es sólo para elegir autoridades y representantes. Es para conocer el estado del país, las tendencias y preferencias de la opinión pública, las orientaciones para el futuro poder, lo que éste puede o no puede hacer sin violar la voluntad de la población. Si los resultados y las proporciones son falseados por el fraude, nada puede saberse. Es como operar con un sistema de pesas y medidas alterado, como atender a un paciente con análisis, cuadros de temperatura y radiografías falsos, como gobernar un país con una información estadística inexacta.

Si para reproducirse el poder tiene que incurrir en semejantes atentados contra su legalidad y su realidad, es que está viviendo una crisis de su propia reproducción. Es el tipo de crisis con que se toparon en los años 80 todos los regímenes de partido

de Estado entonces subsistentes. El mexicano sobrevivió más que el polaco, el checoslovaco o el húngaro, entre otras cosas porque no se le derrumbó la potencia dominante. Pero la reiteración del fraude como sistema indica que no se ha superado la crisis. Menos podrá hacerlo cuanto más compleja se vaya haciendo la integración en el TLCAN.

9. El fraude ha tenido un efecto deletéreo, profundamente pernicioso sobre la salud y el bienestar espiritual de la nación. La supuesta victoria del candidato que hizo su campaña con el lema «Bienestar para tu familia» ha suscitado en México el más hondo y difuso sentimiento de malestar nacional de que se tenga memoria desde los días posteriores al 2 de octubre de 1968. Pesadumbre, desasosiego, frustración, impotencia, desconcierto, son estados de ánimo compartidos después del 21 de agosto, en grados diversos, por quienes votaron las opciones más diversas. Nadie tenía una explicación de las inusitadas cifras. Pero esos estados de ánimo no son duraderos. La vida recobra su ritmo y las relaciones de fuerzas reales retoman su lugar en la sociedad. El poder surgido de esas cifras fantásticas tendrá que aprenderlo a su propia costa.

Fraude y verdad

Una gran esperanza, la de una elección transparente, ha sido frustrada por el fraude y la delincuencia. Una reconciliación nacional después del atraco de 1988, la única verdadera porque estaba basada en un acto cívico compartido por todos (cualquiera hubiera sido su resultado real), ha sido burlada por los dueños del poder. En el ser de la nación esta nueva violación ha producido un daño psíquico que afecta su estructura simbólica. Por eso resulta tan desesperante y tan ridículo el afán del poder de reparar ese daño a través de obsesivos mensajes televisivos sobre la «limpieza inmaculada» de la elección.

Por eso, también, es tan importante, tan absolutamente significativo el papel que puede asumir la Comisión de la Verdad. No se trata, a mi juicio, de que diga quién ganó y por cuánto (empresa sin sentido), o que busque cifras verdaderas o aproximadas. No se trata de legitimar o deslegitimar a nadie, gobierno u oposición. Se trata de algo mucho más profundo y duradero: encontrar la verdad sobre el 21 de agosto; determinar los modos operativos y los rangos posibles - no las cifras precisas - del fraude; dar una dimensión, un cuerpo, una razón al bien que se nos ha arrebatado, a la lesión causada, al equilibrio roto. La verdad no implica sanciones y premios. No está sujeta ni es base para negociación alguna, para reconocimientos o para propuestas políticas de cualquier tipo. En situación así, lo primero es salvar,

hasta donde las pruebas y la razón lo permitan. Como en los casos del Tribunal Russell y otros similares, no se trata de pronunciar sanción alguna para el violador de las leyes humanas. Por el conocimiento de la verdad, la sanción social se ejerce por sí misma y tiende a un restablecimiento del equilibrio perdido.

Cuando en la sociedad flota la idea de que no hay justicia, de que existe impunidad y por lo tanto corrupción, la opinión y la condena social cumplen un papel restaurador del tejido social lesionado. Como las madres que al buscar su bien perdido, sus hijos desaparecidos, buscan al mismo tiempo la verdad, la justicia y la reparación espiritual para una sociedad lacerada, la Comisión de la Verdad, si toma a fondo su sencillo cometido, su compleja tarea y su alta responsabilidad, podrá devolvernos el bien inmaterial que a todos nos ha sido arrebatado y contribuir a fundar los equilibrios venideros de esta sociedad.

Transición sin ley

Czeslaw Milosz llamó «El poder cambia de manos» a su novela de 1955 sobre la oscura transición del poder comunista en Polonia al final de los años 40. El poder cambia de manos: es lo que ha estado ocurriendo en México a espaldas de los mexicanos, porque ese poder siempre fue un asunto de familia y esa familia, la del poder, no es la de los ochenta y más millones que miran con estupor los ajustes de cuentas entre ellos. La hipótesis más razonable obliga a suponer que el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, es un nuevo episodio sangriento de ese proceso secreto y terrible.

En lo fundamental, ese cambio de manos parece haberse operado ya. Un poder oculto, que a nadie rinde cuentas, conduce los destinos de este país: el poder del capital financiero a través de sus socios y representantes políticos. Ese capital se formó y consolidó en la década pasada mediante una infinita e invisible violencia contra la sociedad. Sin ese tipo de violencia es imposible que nadie, en este país de pobres tan pobres y ricos tan ricos, pueda reunir en seis años miles de millones de dólares y más, como lo hicieron Cabal Peniche y sus semejantes.

La violencia, que no la ley, rige la conducta interna de ese poder, el poder de la oligarquía financiera (una de cuyas subsidiarias es el narcotráfico, que ahora se usa para cubrir todo cuando es sólo una de las tantas ramas de inversión de las grandes finanzas y los connotados jefes de cartel como los Arellano y los Chapos sus simples mayordomos). Esa oligarquía gobernante es ya dueña del Estado y del PRI

y no está dispuesta a que esa propiedad le sea cuestionada. Se considera, además, propietaria de la nación y ha ido cambiando las leyes para que, en efecto, así sea.

Pero este poder todavía no tiene reglas estables, ni para sus relaciones internas ni para sus relaciones con la población. Y cuando no hay reglas y normas reconocidas por todos, lo que queda es la violencia, una violencia sin ley y sin piedad tanto entre los de arriba como desde los de arriba hacia los de abajo y finalmente también entre los de abajo, entre quienes no tienen otra ilusión de poder que el uso de la propia fuerza, la desprotegida, la dura y pobre violencia de los pobres.

Hay una secuencia directa entre los tres grandes crímenes de este año: el 23 de marzo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que cambió al candidato presidencial del PRI (ya seguro presidente para el oficialismo); el 21 de agosto, que dio un supuesto 50% de los votos al PRI mediante las artes del fraude y del engaño; el 28 de septiembre, que introdujo un cambio sangriento en el equipo de Ernesto Zedillo con el asesinato de uno de los presuntos hombres claves del próximo gobierno y de la transición.

Como se ha dicho, estamos ante una crisis de reproducción del poder tan profunda como la de 1928-1929 y, tal vez (aunque no con las mismas consecuencias), como la de 1909-1910. Plutarco Elias Calles, después del asesinato de Alvaro Obregón, logró establecer reglas pactadas para el traspaso institucional del poder entre los de arriba. Lázaro Cárdenas, cuando los movimientos sociales se multiplicaban, pudo establecer pactos para la relación del poder estatal con las organizaciones y las movilizaciones de los de abajo. La oligarquía financiera, cuyos políticos desde 1988 tomaron por asalto el Estado, han roto esos dos pactos sin haberlos sustituido por otras reglas y normas consensuadas y, mal o bien, aceptadas por todos.

El nuevo poder, el de la oligarquía financiera, actúa como propietario del país. No quiere ni necesita ciudadanos, sino súbditos. No quiere elecciones, sino simulacros. No quiere negociar sobre lo importante, sino sólo dialogar sobre lo accesorio. No quiere interlocutores, sino comparsas que se crean interlocutores y se pavonean como tales. Es un poder secreto, inteligente y cínico.

Ese poder cambió los pilares constitucionales y jurídicos de la estabilidad de la nación. Las finanzas exigieron libre acceso a los fundamentos de la nación mexicana. El poder cambió el artículo 27 de la Constitución, sobre el régimen de propiedad de la tierra, y rompió uno de los grandes pactos fundadores, con las secuelas trágicas y sangrientas que aún no han terminado de sobrevenir. Con el mismo cambio,

el poder abrió las puertas jurídicas para la venta del subsuelo petrolero. Esa venta está en camino y no se ve en el horizonte la fuerza que pueda impedirla.

Ese poder financiero quiere ir más lejos. Quiere cambiar la formación y la propiedad del conocimiento, aquello que es hoy la riqueza esencial de las naciones. Para ese fin, está preparando un nuevo asalto contra la universidad pública (ya anunciado en la reforma del artículo 3º), para una creciente oligarquización de los sujetos y del contenido de la enseñanza y de los temas y los fines de la investigación.

Las finanzas exigieron libre acceso al otro patrimonio nacional, el trabajo de los mexicanos. El poder destruyó los contratos colectivos y convirtió en letra muerta las leyes y protecciones sociales. Hoy una masa de desocupados asegura, con su presión sobre el mercado de trabajo, la sumisión de trabajadores y sindicatos a los nuevos señores de México, los dueños de la Bolsa y de las vidas. Esa misma masa engendrada por ellos - desocupados, semiocupados, precaristas, ambulantes, marginales, migrantes a quienes les quitaron la tierra, el trabajo, la esperanza y la patria - fue la base para reciclar el corporativismo. Con Pronasol, el Programa Nacional de Solidaridad, Procampo y otros artilugios crearon un corporativismo en andrajos, una masa de clientes pasivos, indefensos, sin derechos, condenados a esperar la buena voluntad de las alturas porque su situación misma les impide organizarse como ciudadanos, hacer oír su voz y hacer valer su voto. Pero este corporativismo carece de la solidez del precedente, que se sustentaba en los antiguos pactos hoy destruidos. Es un sustituto provisorio fuera de toda ley y todo pacto.

Con las elecciones de agosto creyeron haber legitimado este asalto del poder a la nación. Y a otra cosa. Pero un poder que se autorreproduce fuera de las leyes, o cuya norma es la violación de las leyes para poder reproducirse, está condenado a no tener reglas ni ley en sus propias relaciones internas.

A través de esa fractura, obra de un poder que no responde a leyes, penetró el 28 de septiembre de 1994 la réplica del asesinato de Colosio, Mario Aburto, el empistolado solitario, sin identidad, sin motivos y sin mandantes. Pero es una irresponsabilidad acusar a nadie en particular de la autoría intelectual de ese nuevo crimen. Como sería aún peor crear o inventar responsables vicarios para mantener la impunidad de los verdaderos o cubrir el misterio de la trama. El PRI, construido durante decenios como cámara de compensación y ámbito de las mediaciones, ha sido vaciado de contenido y poder sin que otras mediaciones lo sustituyan. Entonces, el cruce directo y sin fusibles políticos entre grandes finanzas y poder provoca cortocircuitos en cadena y sin cuento donde todos pierden, incluidas fracciones mayores

del capital nacional que ven este clima con inquietud y azoro. El tríptico trágico de los años 20: tierra, sangre y poder, ha sido sustituido en los 90 por otro no menos trágico: poder, dinero y sangre. En él se resume la crisis de una clase gobernante sobrepasada por sus actos, sus pasiones y sus intereses.

La impunidad y la oscuridad en que ha quedado el crimen contra Luis Donaldo Colosio, la verborrea y las tergiversaciones que rodean el crimen contra José Francisco Ruiz Massieu son, al igual que ambos crímenes, la evidencia de una enorme crisis nacional. No es la crisis de la transición a la democracia. Es, por ahora, la crisis de una transición sin ley y sin piedad hacia el poder indisputado de las grandes finanzas y sus socios.

Conclusión

Una elección con cifras adulteradas no expresa la realidad ni suprime las crisis. Crisis y realidad, por lo tanto, se abren paso por otro lado. Dos indicios: a) en agosto nadie salió a la calle a festejar el aplastante triunfo del PRI; b) el 28 de septiembre, con el asesinato de Ruiz Massieu donde hasta aparecen implicados, entre otros, un diputado y un senador del PRI, la disputa por el poder saltó a plena luz. Hoy el país contempla atónito a los vencedores eliminarse a tiros. Este asesinato, por otro lado, actualizó el de Colosio, del cual no se encontraron responsables ni se investigó nada.

El otro lado de esta crisis sin precedentes del régimen, pese a su «abrumadora victoria», es que no han resuelto ni parecen tener solución a la existencia y el desafío del EZLN, que se basa sobre todo en la debilidad mostrada por el régimen para enfrentar este tipo de crisis y en una resistencia social que no aparece en las votaciones porque el sistema impide que las urnas sean un reflejo más o menos fiel de la opinión verdadera, como sucede en cambio en cualquier país moderno de esta década.

El carácter de ese poder lo dicen el silencio y el secreto de los actos con que los presuntos nuevos gobernantes rodean en estas semanas la preparación de sus futuros planes, actos y decisiones de gobierno, mientras la oposición, perdida en su propio desconcierto, sigue hablando de lo mismo y pide diálogos sin saber para qué ni sobre qué.

En esa oposición se destaca el desconcierto de los dirigentes del PRD, reflejado en las contradicciones de la resolución de su último Consejo Nacional, aprobada, sin

embargo, por unanimidad y sin que nadie alzara su voto en contra. Es el mismo Consejo Nacional que en enero del 94, con igual unanimidad, abrazó «la causa» (así, la causa) del EZLN. Algunos han visto un viraje en la reciente resolución. Sin embargo, lo que se registra es una notable continuidad de fondo, que se expresa mucho más en los hechos que en los dichos.

No acabará de constituirse el nuevo poder sin que muchas cosas pasen. No terminará de cambiar de manos sin que otras fuerzas se hagan presentes desde otros lugares de esta sociedad herida pero viva, pensante y en buena parte convencida, sí, de que democracia, derechos y justicia son condiciones de su existencia y de su paz.

Mucho ha cambiado en las conciencias en estos seis últimos años. Los crímenes que tiñeron la transición de los años 20 no son tolerables ni perdonables para la sociedad mexicana de los años 90. No son los tiempos de Huitzilac ni los de Tlatelolco. Cansada de hipócritas condenas, quién sabe cómo, dónde y cuándo, la conciencia de esta nación se levantará en protesta verdadera. La impunidad, esta vez, no está del todo asegurada.

Ciudad de México, noviembre de 1994